



El Ecuador frente a una nueva etapa política

Quito, enero de 2003

C O N T E N I D O

Los antecedentes del nuevo gobierno.....	3
Composición del nuevo régimen.....	5
Una aproximación al país que afronta el nuevo gobierno.....	6
El Fondo Monetario y el futuro de la dolarización.....	9
Los cinco ejes del gobierno.....	10
Primeras conclusiones.....	13
Bibliografía.....	15

EL ECUADOR FRENTE A UNA NUEVA ETAPA POLÍTICA

LOS ANTECEDENTES DEL NUEVO GOBIERNO

El 15 de enero de 2003 con la posesión del nuevo presidente de la República, el coronel Lucio Gutiérrez, el Ecuador abre una nueva etapa histórica. Por tanto, nos ha parecido interesante convertir a este documento, que debería ser un análisis de coyuntura sobre lo vivido en el 2002, en una reflexión sobre las perspectivas inmediatas en el país.

Nos parece importante hacerlo por algunas circunstancias inéditas que protagoniza el nuevo gobierno:

1. Se trata de una elección definida dentro de una marcada dispersión política que significó que la candidatura de Gutiérrez se haya impuesto en la primera vuelta electoral con apenas un 22% de los votos en las urnas. Una dispersión política que no se corrigió en la segunda y definitiva vuelta, pues los grandes partidos políticos dominantes en el congreso se silenciaron frente a las dos candidaturas finalistas. El candidato Gutiérrez ganó la presidencia sin haber concretado una poderosa alianza política para la segunda vuelta, lo que conlleva una debilidad en el escenario político que ha tratado de ser compensada con un marcado personalismo. Por tanto, en el gabinete no están representadas más que las dos fuerzas políticas que le apoyaron: Sociedad Patriótica y Pachakutik, y el entorno íntimo del candidato con el que se inició la candidatura, sin sumar nuevos aliados, hecho que no ocurrió en ocasiones anteriores.
2. La fuerza política del nuevo mandatario se originó en un intento de golpe de estado que acabó con el gobierno de Jamil Mahuad en enero del año 2000. El propio nombre del partido creado por el presidente Gutiérrez evoca el golpe, lo cual genera en primera instancia una paradoja: un gobierno que llega por la vía democrática a partir de un intento por truncar un estado democrático previo. Aquello ha sido interpretado como una reproducción del fenómeno venezolano de Hugo Chávez. Si bien no funciona, la comparación es evidente de que se trata de un gobierno con ciertos rasgos autoritarios que pueden surgir en caso de no conseguir un necesario acuerdo con otras fuerzas políticas.
3. Es la primera ocasión en la que un militar llega al poder por la vía democrática y constituye un equipo de gobierno dominado en alrededor de un 40% por ex militares, lo que evidentemente marcará un estilo de gobierno.

4. Gutiérrez triunfó en una alianza igualmente inédita con el movimiento indígena que había venido actuando exclusivamente en el parlamento y en algunos gobiernos seccionales. La conformación del gabinete ministerial refleja la presencia, por primera vez, de dirigentes indígenas en el gobierno, lo que modifica grandemente el funcionamiento de la política en el Ecuador, no sólo por la presencia de nuevos actores sociales, sino porque la irrupción en el poder del movimiento indígena modifica el imaginario de la sociedad ecuatoriana.
5. La alianza entre los ex militares y el movimiento indígena es una alianza no exenta de contradicciones y diferencias profundas. Por una parte, el movimiento indígena deberá afrontar desde el gobierno algunas políticas que aparecen como "inevitables" y que las ha rechazado activamente durante una década, como por ejemplo la aceptación de medidas de ajuste impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Por otra parte es evidente que el único sector con identidad y madurez ideológica y política es el sector indígena, mientras que el sector de funcionarios ex militares carece de posiciones coherentes y sólidas, al tiempo que el sector del manejo económico del nuevo gobierno está en manos de funcionarios provenientes de la banca y de posiciones abiertamente neo liberales. Esta es una amenaza latente desde el inicio del gobierno y tampoco Lucio Gutiérrez cuenta con una posición y claridad política que se imponga sobre las divergencias que puedan surgir. De hecho, si el movimiento indígena llegara en un momento a abandonar el gobierno, éste quedaría sin brújula y a merced de sectores de poder tradicionales y vinculados a la derecha política y económica, lo que vuelve imperiosa la permanencia del partido indígena Pachakutik en el gobierno. Las contradicciones han comenzado ya a expresarse entre el bloque de diputados de Pachakutik y el bloque que llegó al parlamento a la sombra personal de Lucio Gutiérrez (compuesto por familiares y ex militares).
6. Es la primera ocasión que las dos mayores fuerzas políticas del país (el derechista partido socialcristiano y la socialdemocracia) establecen una alianza, y con fines de oposición frente al nuevo gobierno. Las dos representan la antítesis de la alianza que apoyó a Lucio Gutiérrez, aunque el "juego" político podría limar en el futuro las diferencias con la socialdemocracia o provocar rupturas a su interior entre los enemigos recalcitrantes de Gutiérrez y los que consideran como posible una influencia futura sobre el nuevo mandatario.

Estas características, a más de ser inéditas en la historia reciente del país, nos colocan ante una disyuntiva: o estamos frente a la oportunidad de un cambio profundo en la clase política ecuatoriana o este intento puede frustrarse por la falta de experiencia del equipo gobernante y quedar el gobierno sumamente frágil, fragmentado en su interior y obligado a ceder ante los partidos tradicionales.

Un régimen democrático que llega impulsado por un golpe de estado, que incluye por primera vez en el manejo del Estado al sector indígena, que ha roto relaciones con la vieja clase política y que está protagonizado por un grupo de ex militares fieles a un coronel convertido en mandatario, son ingredientes nuevos y preocupantes.

COMPOSICIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN

Entrando en el detalle con respecto a lo anteriormente anotado, encontramos una composición heterogénea del gobierno.

El movimiento indígena, autor a través de 16 mesas de diálogo convocadas para la preparación de un programa de gobierno realizadas en los dos últimos meses, controla tres sectores absolutamente claves -política agraria, política educativa y política internacional-, un ministerio de menor jerarquía pero con una interesante perspectiva económica -Turismo- y una posición clave en el equipo más directamente vinculado al presidente a través del Secretario de Planificación. El sector banquero y empresarial controla la política interna a través del ministro de Gobierno y la política económica a través de un poderoso ministro de Economía surgido de las filas de la banca. Los ex militares y amigos personales de Gutiérrez controlan un sector vital, la política energética (petróleos), las políticas sociales (en estrecha relación con Pachakutik), las Fuerzas Armadas, el entorno íntimo del presidente y algunos ministerios menores.

Existe un fuerte carácter regional (Sierra) en esta composición, y es la primera ocasión en la que actúan en un gabinete presidencial cuatro mujeres, tres de ellas vinculadas o surgidas del movimiento indígena. En efecto, están en el gabinete dos figuras históricas: Luis Macas y Nina Pacari, y dos personalidades próximas al movimiento indígena, Doris Solís, fundadora y ex directora de la organización Sendas en Cuenca, y Rosa María Torres, educadora que ha venido trabajando con Pachakutik. Lo primero, la tendencia regional, puede significar conflictos con los poderosos sectores económicos y políticos de Guayaquil. Lo segundo, la presencia de cuatro mujeres resulta muy saludable, particularmente por la calidad de al menos tres de las funcionarias seleccionadas.

Otros sectores claves del Estado irán siendo negociados entre las dos fuerzas políticas que protagonizaron la alianza electoral, más en función de intereses de grupo que de orientaciones políticas. Y entre esos sectores están algunos de enorme importancia como la seguridad social, las entidades estatales de crédito para la producción, el sistema de recaudaciones tributarias, los organismos de control, los responsables del sector eléctrico y de comunicaciones, los responsables de administrar el sector bancario que quebrara en 1999, el Banco Central, entre otros.

UNA APROXIMACIÓN AL PAÍS QUE AFRONTA EL NUEVO GOBIERNO

Tres aspectos aparecen como centrales entre los problemas que deberá afrontar el nuevo gobierno:

- a) Una crisis económica que significa, de modo inmediato, un déficit presupuestario de cerca de 2 mil millones de dólares, provocado por pagos atrasados a la burocracia y obligaciones de la deuda externa a ser cubiertas de modo inmediato. Una cifra que significa alrededor del 30% del presupuesto estatal. El gobierno ha tomado, desde las primeras semanas, medidas de ajuste que tradicionalmente provocan un profundo malestar social, y ahora decidido por un gobierno con presencia activa del mayor opositor a ese tipo de medidas, el movimiento indígena. Solamente los atrasos en egresos que debían realizarse durante el 2002 alcanzan a 700 millones de dólares. Las medidas del régimen han sido un aumento del costo de los combustibles con elevaciones de alrededor del 30%, un nuevo impuesto al rodaje para afectar a los automóviles de lujo y como medidas compensatorias un muy ligero incremento del Bono de Solidaridad que reciben alrededor de 2 millones de personas de escasos recursos y que pasó de 11 dólares a 15 dólares mensuales (Sin embargo es volumen de población se reducirá en más de 200.00 personas). Adicionalmente ha enviado al congreso una reforma tributaria que significaría la ampliación de la cobertura del impuesto a la renta, al tiempo que está pensando en militarizar las aduanas para frenar el contrabando, medida que ya se tomó en el pasado con muy relativo éxito.
- b) Una presión de los sectores sociales que llegaron al poder con Gutiérrez y que tienen demandas represadas.
- c) Un difícil escenario internacional caracterizado por una pérdida creciente de competitividad de la producción nacional sujeta a un patrón monetario sumamente rígido: el dólar; la inminencia de las negociaciones para la conformación del Área de Libre Comercio ALCA que dividirá las posiciones dentro del gobierno; la guerra interna en Colombia que involucrará al país y generará muy fuertes tensiones no sólo internas sino con el actual gobierno de Colombia y con el gobierno norteamericano, que pueden forzar compromisos por parte del Ecuador, sobre los cuales los desacuerdos en el país son muy profundos; y un necesario cambio en las posiciones nacionales frente al tema de la deuda externa.

A estos problemas, los analistas agregan otros de importancia tanta o mayor: la corrupción (el gobierno de Gustavo Noboa cuenta en su haber con dos ministros de finanzas, un ministro de Salud y cuatro altos funcionarios de

dicho ministerio, más dos altos funcionarios responsables de sanear la banca estatizada en 1999 actualmente prófugos de la justicia), la seguridad interna y la inestabilidad política que ha significado que los dos últimos mandatarios electos en las urnas hayan sido derrocados al poco tiempo de ejercicio del poder.

Algunas de las características concretas de la situación económica actual se resumen en:

- Una economía que no mantiene un ritmo constante de generación de empleo. Aún en las fases de crecimiento económico reciente el nivel de empleo agregado no sube o lo hace en forma muy limitada. Si el gobierno habla de haber reducido a alrededor del 12% el desempleo abierto, esto ha sido posible por una emigración que en los últimos tres años ha alcanzado el 10% de la población económicamente activa, y se mantiene un subempleo de sobre el 60% de esta población. Por tanto, más del 80% de la población económicamente activa mantiene relaciones de trabajo precarias en el país o fuera de él.
- La inflación continúa pesando gravemente sobre la economía de la gente, aunque ha descendido en forma significativa, desde la tasa anual promedio de 96% en el 2000 hasta estabilizarse en torno al 9.6% a fines del año 2002.
- Luego del salvataje del sistema bancario, la crisis del sistema no ha desaparecido, sigue siendo un sector débil, sumamente costoso, ineficiente y que no ha recuperado la plena confianza de la ciudadanía. Finalmente los costos se trasladaron a la población a través del ajuste de tarifas, el incremento del IVA y la reducción del gasto social. Persiste una brecha entre las tasas de interés activas y pasivas de por sobre los 10 y 12 puntos, con lo que las actividades productivas, que ya tienen dificultades para competir, ven encarecerse sus costos. (Las tasas de interés activas están en torno al 15% mientras las pasivas están por bajo el 5%.)
- La balanza comercial persiste por segundo año con saldo en rojo que supera los mil millones de dólares, lo que en una economía dolarizada significa un peligroso camino hacia la iliquidez de la economía. Esta tendencia se ha manifestado de modo creciente desde el año 2001.
- Concomitantemente, los sectores productivos presentan muy bajos niveles de competitividad debido, según los analistas, a la limitada incorporación de tecnología y la baja calificación de la mano de obra, agravada por los déficit de servicios e infraestructura básica. Ha existido una política que ha priorizado al sector financiero y especulativo sobre el productivo.

- El peso de la deuda externa y de su servicio ata de pies y manos a los gobiernos. Esta situación se agravó en el año 2002 cuando el Congreso, por pedido del gobierno, estableció una distribución de los recursos que se generarán a partir de junio del 2003 por el incremento de la explotación petrolera, según el cual el 70% de estos ingresos se dedican exclusivamente al cumplimiento de la deuda externa, un 20% a un fondo de estabilización y apenas un 10% a políticas sociales. A pesar de la renegociación realizada en el 2000, el servicio de la deuda pública total ha seguido representando el 44.6% del total de ingresos corrientes.
- Existe un endurecimiento de las condiciones para obtener crédito externo, lo que, si bien puede significar una limitación al endeudamiento, asfixia aún más las finanzas públicas tradicionalmente inclinadas a financiar los déficit con endeudamiento.
- Se mantiene una elevada dependencia de ingresos petroleros, tanto para la generación de divisas por concepto de exportaciones, como en los ingresos del Estado. En el 2001, los ingresos petroleros representaron el 35.9% del total de ingresos del Estado (41.5% en el 2000).
- La distribución del ingreso en el Ecuador es una de las más desiguales de la región y lejos de mejorar tiende a agudizarse en los últimos años. Según el Centro de Derechos Económicos y Sociales - CDES, mientras en 1990, el 10% más rico de la población captaba el 35.4% del ingreso nacional, en el año 2000, pasó a captar el 45.3% del mismo, en detrimento de la participación en el ingreso del resto de la población que en general descendió. En el otro extremo, el 10% más pobre de la población que en 1990 percibía el 1.8% del ingreso, pasó a captar apenas el 1.1% en el 2000. “Los niveles de pobreza e indigencia se han agudizado en el período 1999-2001”, afirma el CDES. En efecto, el Ecuador tiene este momento un 69% de su población bajo los niveles de pobreza y un 34% bajo los niveles de miseria. Según el mismo instituto CDES, el costo de la canasta básica familiar para fines del 2002 fue ampliamente superior al salario nominal de US\$ 140; “esto evidencia una brecha entre lo que ganan los ecuatorianos (salario nominal) y lo que necesitan para vivir. Actualmente los ecuatorianos ganan menos de la mitad de lo que necesitan para vivir, incumplándose el derecho a un trabajo justo y digno, y configurando una situación social sumamente difícil que explica la creciente migración de los ecuatorianos hacia el exterior y el ingreso de niños menores de 12 años a la fuerza laboral”. Una de las situaciones más dramáticas es la que viven los jubilados, cuyas rentas mensuales son muy inferiores a los salarios mínimos.
- En términos políticos, además de lo ya señalado, el gobierno deberá romper la resistencia de los partidos tradicionales mayoritarios en el

Congreso para alcanzar respaldo a las propuestas del presidente. Por otra parte, el gobierno está iniciando una estrategia de diálogos de modo de romper cercos (particularmente cercos en torno al movimiento indígena), y ampliar la base política del régimen.

EL FONDO MONETARIO Y EL FUTURO DE LA DOLARIZACIÓN

Las posibilidades de alcanzar una negociación con el Fondo Monetario Internacional son, desde hace rato, una incógnita en el país. El gobierno saliente habla de "condiciones inaceptables" para un acuerdo, cuando más bien se trató de una imposibilidad de justificar ciertas políticas "alegres" de gasto, y a la decisión de dejar al nuevo gobierno la necesidad de aplicar la receta del Fondo.

Al gobierno le corresponderá medir los réditos de la receta FMI frente a sus costos, no sólo en términos de deterioro de las relaciones sociales sino de los efectos en términos de "encarecer los costos de producción locales" (W. Salgado) y volver aún menos competitiva a la producción nacional.

"La disyuntiva fundamental que enfrenta el próximo gobierno -afirma Wilma Salgado en la revista Ecuador Debate- consiste en consecuencia, en optar por ceder a la presión de los acreedores de la deuda pública, apoyados por el FMI, de aplicar un paquetazo de medidas que provocaría además de su pérdida de popularidad, un mayor empobrecimiento y agudizaría la pérdida de competitividad de los productores locales, o tomar medidas para ajustar las cuentas pendientes del salvataje bancario (1999) tanto con los ex accionistas de los bancos en manos de la AGD (entidad estatal que maneja la banca quebrada) como con las instituciones públicas que participaron en dichas operaciones". Una recuperación que debe también afectar a las empresas vinculadas a los ex propietarios de la banca quebrada.

En efecto, se calcula que el Estado gastó más de 2 mil millones de dólares para cubrir las quiebras de alrededor del 70% de la banca privada y no ha logrado, en tres años, sino recuperaciones simbólicas.

La dolarización continúa sustentándose en factores exógenos o muy variables, lo que genera incertidumbre en el futuro.

Por una parte, el mantenimiento durante los tres últimos trimestres de 2002 de los precios del petróleo sobre los 20 dólares el barril y la presencia - aunque con tendencia a disminuir- de las remesas de los emigrantes- como, por otra parte, la inyección de capital a través del crecimiento de la deuda externa privada -disfraz de inversión externa que supera una cifra acumulada superior a los 4 mil millones de dólares-, han ayudado a controlar mayores déficit y una caída mucho más aguda del comercio exterior que, sin embargo,

presenta en los dos últimos años un creciente déficit producto de la pérdida de competitividad de la producción nacional y el crecimiento vertiginoso de las importaciones.

Es muy probable que los precios del petróleo en el mercado internacional no sólo bajen sino que lo hagan aparatosamente, y que las remesas de los emigrantes sigan en caída y no aparezcan significativas inversiones externas, con lo que la aparente bonanza bajo dolarización se irá desvaneciendo.

LOS CINCO EJES DEL GOBIERNO

Frente a este panorama, el presidente Lucio Gutiérrez ha anunciado cinco ejes de su gobierno, pero que no constituyen aún un plan de gobierno con las estrategias para cumplirlo:

- a) Combate a la corrupción fortaleciendo los organismos de control (incluido la comisión ciudadana de control), despolitizando el poder judicial y las cortes, buscando la extradición de los banqueros prófugos que provocaron la crisis de 1999 y volviendo públicas las licitaciones y todos los procesos de contratación estatales;
- b) combate a la pobreza a través de generación de empleo, incremento de los presupuestos para educación y salud y apertura de nuevas actividades productivas vinculadas a la biodiversidad;
- c) seguridad ciudadana radicalizando las políticas contra la delincuencia y el terrorismo (sic);
- d) búsqueda de la competitividad del sector productivo y exportador;
- e) una política internacional que se sustente en independencia económica y política. Dos formas en que podría expresarse esta política independiente es fortaleciendo los procesos de integración subregionales para cambiar los términos de relación en el marco del ALCA y regionalizar a su vez propuestas de acción conjuntas en el caso colombiano, de modo de evitar que Ecuador sea articulado aisladamente a la estrategia norteamericana de lucha contra el terrorismo. El presidente electo ha sido enfático en sumarse a la posición crítica frente al ALCA protagonizada por el nuevo mandatario de Brasil. Igualmente el gobierno intentará modificar los términos en los que el país es considerado en el ámbito internacional para efectos de beneficiarse de programas para combatir la pobreza y buscar una renegociación de la deuda externa, teniendo en cuenta que buena parte de los bonos de dicha deuda están, paradójicamente, en manos de especuladores financieros ecuatorianos.

El nuevo presidente tiene, según el CDES, muchos retos por delante. Plantea algunos que nos parecen interesantes recoger en este documento:

1. ¿Cuál será la política redistributiva que permita que el 70% de la población en el límite de pobreza cumpla con su derecho a una vida digna y de calidad?
2. ¿Cuándo el gobierno otorgará mayor importancia al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales dispuesto en la Constitución, en lugar de privilegiar a las élites económicas nacionales e internacionales?
3. ¿Cómo pretende cumplir con lo dispuesto en la Constitución de la República, respecto a que el 30% del presupuesto debe destinarse a la educación, si actualmente sólo se asigna el 10%?
4. ¿Cuándo se empezará a cumplir el derecho a la información, consulta y participación que tienen todos los ecuatorianos y ecuatorianas sobre las políticas que afectan su bienestar social y económico?
5. ¿Cuál es la política de generación de empleo que permitirá que la mayoría de las familias tenga un ingreso digno y justo, acorde al costo de la canasta básica familiar?
6. ¿Cuáles serán los usos que se den a los recursos que se obtengan con las privatizaciones / concesiones en los sectores petroleros, mineros, telecomunicaciones, y servicios básicos?
7. ¿Cuándo variará la política económica priorizando el bienestar de la población ecuatoriana, en lugar de favorecer los intereses de grupos económicos nacionales y extranjeros?

Es difícil prever qué resultados vaya arrojando el régimen de Gutiérrez, en buena medida por la ausencia de un plan de gobierno y por la marcada diferencia de capacidades entre el sector del gabinete controlado por Pachakutik y el sector de ex militares. De todos modos estos interrogantes podrán permitir una evaluación luego de por lo menos seis meses de transcurrido el gobierno.

Apenas si es posible una aproximación a algunas consecuencias de un régimen de estas características:

- a) Podemos asistir a una renovación de los actores políticos, un relevo que incluso puede darse dentro de los partidos tradicionales que han visto a sus antiguos líderes perder presencia. En ese sentido es importante la

estrategia de diálogos nacionales iniciada por la presidencia de la República.

- b) El movimiento indígena muy posiblemente consolidará su presencia en el escenario político, tanto por la experiencia que se apresta a vivir como por la fortaleza orgánica que le dará su presencia en la gestión de gobierno, y por el reconocimiento de un espectro amplio de la sociedad.
- c) Las prioridades sociales van a ganar terreno, aún cuando si los cambios puedan no ser mayores en cuanto a las posibilidades de empleo, la disminución de los niveles de pobreza, el incremento presupuestario a educación o salud. En áreas como la agraria se producirán seguramente cambios más profundos en cuanto a dar prioridad a políticas de seguridad alimentaria (con la creación de un Fondo de Seguridad Alimentaria), y apoyo a los productores de alimentos de consumo interno, por sobre las políticas tradicionales que han fortalecido exclusivamente los sectores agroexportadores.
- d) Dependiendo del rumbo que tomen los regímenes políticos en América Latina y el desarrollo de sus movimientos sociales, ciertas tesis como los cuestionamientos al ALCA, el fortalecimiento de las integraciones subregionales y la búsqueda de alternativas distintas a las norteamericanas en el caso de Colombia, se afianzarán en el Estado.
- e) El gobierno se va a ver en la necesidad de forzar cambios en campos como el tratamiento de la deuda externa, la composición del gasto público con prioridad hacia lo social, las privatizaciones que no han sido evocadas en ningún momento por miembros del nuevo gobierno, las condiciones de los contratos de explotación petrolera, entre otros.
- f) Continuará avanzando la institucionalización de formas de participación y vigilancia ciudadanas sobre la gestión pública. Así es como dos veedurías acaban de anunciarse en estos días: una dirigida a vigilar y pedir cuentas al Estado en el tema de la deuda externa, impulsada por el movimiento Jubileo 2000; y otra promovida por la Fundación Esquel para vigilar el proceso electoral y posteriormente pedir cuentas a los candidatos triunfantes sobre sus promesas de campaña. Otras veedurías existen en el país, sobre el gasto social impulsada por UNICEF, o sobre la cooperación internacional gestionada por el Comité Ecuménico de Proyectos.

Jubileo 2000 defiende el rol de las veedurías sociales, evocando un efecto en cadena: los procesos sociales están constantemente produciendo cambios en los esquemas con los que funcionan las sociedades. “En este sentido, la práctica social genera cambios en la institucionalidad jurídica, y estos a su vez estimulan nuevas prácticas que implican avances hacia nuevas formas de organización” afirma César Sacoto, uno de los directivos de Jubileo 2000.

Para Sacoto, en el Ecuador, a partir del reconocimiento constitucional del derecho ciudadano a la vigilancia, se crean las veedurías sociales, y la actuación de éstas determina una mayor conciencia de la responsabilidad ciudadana de cuidar sus propios intereses.

Finalmente, una de las veedoras que actúan en el terreno de la deuda externa, Wilma Salgado, cree que un elemento clave es la reforma de la justicia en el Ecuador. La experiencia, particularmente de la Comisión Anticorrupción, señala Salgado, catedrática universitaria y redactora económica de la revista Ecuador Debate, es que todas las investigaciones para transparentar la gestión del Estado y establecer la corrupción, se atascan al llegar a los tribunales de justicia. Hasta allí llega el tema. Wilma Salgado recuerda el caso del salvataje bancario sobre el cual se derramó mucha tinta y se creó un rechazo de la colectividad.

PRIMERAS CONCLUSIONES

1. Insistimos en lo ya dicho: se trata de la presencia, por primera vez en la historia del país, del movimiento indígena dentro de un gobierno nacional. El movimiento ha ido dando pasos a partir del levantamiento de 1990 que fue un primer avance hacia una apertura del conjunto de la sociedad a la presencia de los pueblos indios. Un segundo paso fue la creación del partido político, Pachakutik, que permitió que los líderes indígenas locales participen en los procesos democráticos y combinen la lucha directa con la presencia en los órganos del Estado. Un tercer paso fue consolidar, a través de tres elecciones consecutivas, un importante bloque legislativo y el control de al menos 30 municipios de 220 existentes en el país, municipios que rápidamente fueron identificados como los protagonistas de un nuevo modelo de gestión local. La alianza con Lucio Gutiérrez y la presencia en el gabinete con cuatro ministros y por lo menos seis subsecretarios de Estado, además de una participación en otros organismos estatales, es la culminación, por el momento, de todo este proceso. Este elemento es el primero a tener en cuenta para realizar un seguimiento muy cercano al futuro de este hecho inédito.
2. A partir de lo anterior, se puede anticipar que las organizaciones no gubernamentales que han venido trabajando por tres décadas y más para fortalecer el campesinado y las comunidades indígenas, no podrán desentenderse del proceso y recibirán constantes demandas del movimiento indígena para que acompañen en la gestión. Creemos que hay un cambio cualitativo en perspectiva. Lo afirmaba José Tonello, director del FEPP: “Si antes el ministerio de Agricultura servía a 500 propietarios, hoy se abre para 2 millones de campesinos”. Desde esa perspectiva es muy posible que las demandas hacia las agencias de cooperación versen sobre los requerimientos que vaya a enfrentar el

movimiento indígena en muy distintos sentidos: proyectos productivos, estrategias de acceso de los alimentos al mercado, sistemas financieros rurales, capacitación administrativa, etc. Ya lo señalamos anteriormente, la presencia de dirigentes indígenas que han crecido junto al trabajo de ONG o de programas de solidaridad internacional que están dentro del gabinete de Gutiérrez. Y poco a poco se suman nuevos: Manuel Chiriboga, secretario ejecutivo de ALOP es el nuevo subsecretario político de Agricultura, la dirigente indígena de Chimborazo Lourdes Timba es subsecretaria de Desarrollo Rural en el ministerio de Bienestar Social.

3. Un acompañamiento al movimiento indígena deberá tener una importante dosis crítica, en términos de impedir en lo posible que el movimiento se desgaste en el ejercicio del poder. Nos parece que hacia mediados de este año será necesario detenerse nuevamente en la coyuntura para valorar lo avanzado, sacar lecciones de errores y aciertos que puedan ocurrir.

BIBLIOGRAFÍA

- **Descpierta.** Boletín informativo del Centro de Derechos Económicos y Sociales. No.2. Quito, Diciembre 2002.
- **Ecuador Debate** Nos. 56 y 57, Quito, 2002.
- **Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas.** Universidad de Guayaquil. Tendencia de la economía en el 2002. Guayaquil, julio 2002.
- **El Universo y El Comercio.** Ediciones de noviembre y diciembre de 2002 y enero de 2003.